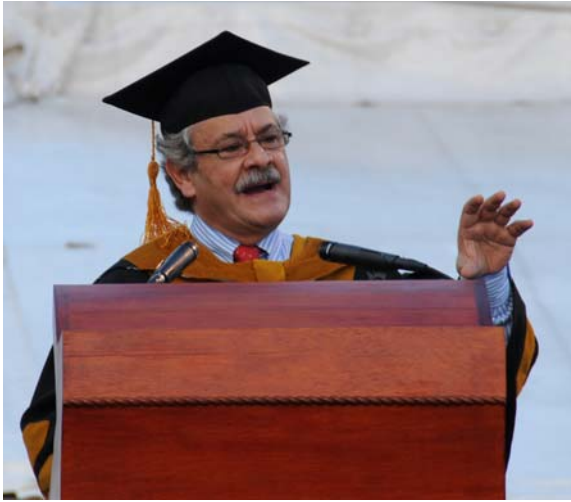


Discurso del Dr. Eduardo Pizarro Leongómez



En Colombia existe un debate permanente entre columnistas de prensa, científicos sociales y líderes políticos o gremiales en torno a cual es la principal grieta geológica que le impide a nuestro país desplegar todas sus potencialidades como nación.

Todos estamos de acuerdo en que existe un hondo abismo entre lo que Colombia podría ser -de acuerdo a sus increíbles potencialidades humanas y materiales- y lo que Colombia es.

Unos ubican esta falla geológica en la corrupción administrativa. Otros en el narcotráfico con todas sus secuelas. Los de más allá en el clientelismo y la deficiencias que genera en la gestión pública.

Desde mi perspectiva personal, la principal grieta geológica de Colombia es la violencia.

Tercer conflicto más antiguo del mundo

Como muchos de ustedes saben, el conflicto armado que afecta a Colombia es uno de los tres conflictos más antiguos del mundo. Una triste y dolorosa realidad.

Si tomamos en consideración todas las confrontaciones armadas que actualmente sacuden al mundo (Irak, Israel-Palestina, Afganistán, Sudán, Somalia, Sri Lanka, Uganda, Filipinas, Chechenia, Cachemira, Colombia), tres se caracterizan por su carácter extremadamente prolongado: más de cincuenta años. Se trata de la confrontación entre la India y Pakistán por el control de la región de Cachemira (1947), el enfrentamiento israelí-palestino (1948) y la violencia que sacude a Colombia poco antes pero sobretodo tras la muerte del líder populista, Jorge Eliécer Gaitán (1948).

Es decir, salvo los colombianos mayores de 65 años, la mayoría de la población no ha vivido un solo día en paz.

Conflicto prolongado y “efecto de persistencia”

Según los expertos internacionales es muy difícil superar conflictos prolongados.

Por una parte, en este tipo de conflictos es usual que se configure un “efecto de persistencia” debido a una cierta rutinización de la violencia como herramienta de acción social y política. En efecto, no es improbable que algunos sectores sociales o actores políticos tiendan a utilizar la violencia como un recurso de acción colectiva. Es

decir, la violencia como un instrumento para obtener desde beneficios privados hasta frutos políticos. Es impactante constatar que las FARC, que nacieron en 1964, hayan celebrado su aniversario 45 este año. 45 años de una guerra inútil.

Por otra parte, en los conflictos prolongados se generan dinámicas difíciles de quebrar de “represalias y contrarrepresalias”, como ocurre en el conflicto entre Israel y Palestina. Tras la muerte de un israelí se produce una respuesta inmediata que conduce a la muerte de un palestino, en un ciclo perverso e interminable. En Colombia denominamos este fenómeno como “deudas de sangre”.

Finalmente, en estos contextos lo normal es que se genere una honda desconfianza entre todos los actores involucrados, lo cual conlleva a un bloqueo y a un fracaso sistemático de todos los intentos de adelantar procesos de negociación y paz.

¿Cómo romper, entonces, el ciclo de la violencia?

Esta pregunta nos la estamos formulando los colombianos desde ese lejano día en que fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán. Desde el 9 de abril de 1948.

Ante todo es indispensable que superemos los estereotipos falsos, es decir, la idea de que los colombianos estamos condenados a la violencia, ya sea por razones genéticas, culturales o históricas.

Ha habido historiadores -en realidad no si se merezcan esa denominación-, que han argumentado que la violencia que sufre el país tiene un origen genético proveniente de nuestras raíces nativas. Otros, más sofisticados, han argumentado que la violencia recurrente se ha sedimentado y que, por tanto, tiene raíces culturales (“cultura de la muerte”) o históricas (“Colombia: un país de guerra permanente”).

Se trata de unas apreciaciones falsas. La mayor evidencia son los relatos de los viajeros y diplomáticos extranjeros que visitaron al país entre 1902 y 1946. En estos relatos, Colombia aparece como una de las naciones ejemplares a nivel mundial: elecciones regulares, ausencia de golpes militares, estabilidad macroeconómica, bajos niveles de criminalidad. Colombia aparecía en aquellos años a los ojos de los observadores internacionales como una evidencia de las posibilidades de los países del Tercer Mundo para construir una sociedad democrática en paz.

Sí Colombia fue durante medio siglo un modelo de estabilidad y paz interna esto significa que no estamos condenados a la violencia. Significa, contrariamente a los estereotipos mencionados, que la violencia constituye un proceso que tiene un antes y un después.

Bajo la convicción de que los colombianos no estamos condenados a la violencia ni por razones genéticas, ni culturales ni históricas hemos hecho múltiples intentos - desgraciadamente fallidos hasta el momento-, para terminar el conflicto interno.

Múltiples intentos fallidos

En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla creó la Oficina Nacional de Rehabilitación y Socorro como un instrumento para enfrentar las secuelas del período de la Violencia (de la Violencia en mayúsculas, es decir, en su período clásico). Esta oficina estaba, ante todo, orientada hacia los excombatientes de los grupos guerrilleros desmovilizados y hacia la población desplazada. Para ello, se diseñaron políticas de restitución de bienes, retorno sostenible y productivo, atención de emergencia a la población desplazada, etc.

Desgraciadamente, un año más tarde esta institución fue disuelta y algunas de sus funciones fueron asumidas por la Secretaria Nacional de Asistencia Social (SENDAS) que, bajo la dirección de María Eugenia Rojas de Moreno, colocó el acento en el auspicio de mercados populares, aguinaldos a los niños pobres, restaurantes escolares, guarderías infantiles y centros de bienestar social.

En 1955 ya el país estaba de nuevo inmerso en una nueva era de violencia que los historiadores han denominado el período de la “violencia tardía”.

Para enfrentar esta nueva ola de violencia, Alberto Lleras Camargo creó en los inicios del Frente Nacional, en 1958, la Comisión Nacional de Rehabilitación presidida por el prestigioso ingeniero, José Gómez Pinzón. Sus funciones eran similares a las de la Comisión anterior: por una parte, la reintegración de los excombatientes a la vida civil. Por otra, la rehabilitación de las principales regiones devastadas por la guerra mediante el retorno de la población campesina y la restitución de sus bienes.

Los avances fueron modestos y la Comisión fue disuelta el 29 de diciembre de 1960, con más pena que gloria. Poco después viviríamos el último coletazo de la Violencia (con mayúsculas) con el fenómeno del bandolerismo y se iniciaría un nuevo período de violencia -que se extiende hasta hoy-, marcado con el surgimiento de las guerrillas posrevolución cubana.

Durante los años 80 y 90 del siglo pasado los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria mediante negociaciones de paz y leyes de amnistía e indulto lograron la desmovilización y reintegración a la vida civil de algunos grupos guerrilleros (tales como, el M-19, el EPL, el Quintín Lame).

Sin embargo, las FARC y el ELN no asistieron a la cita histórica que constituyó la firma de la Constitución de 1991 y continuaron sus acciones militares. Lo cual dio origen al nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1996. Y vinieron los años del horror.

Autopista de tres carriles

Por ello, en los últimos años estamos explorando un nuevo camino. Podríamos denominarlo la “autopista de cuatro carriles”.

Por un primer carril corre la política de seguridad democrática, es decir, el fortalecimiento del Estado, de las Fuerzas Militares y de Policía y un debilitamiento de los actores armados, un encogimiento de sus áreas de influencia y de sus fuentes de financiamiento (el narcotráfico y el secuestro)

Por un segundo carril, corre la política de paz impulsada inicialmente por Luis Carlos Restrepo la cual logró la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Por un tercer carril pasa la política de reintegración de los excombatientes a la vida civil, orientada por Frank Pearl y que tiene a su cargo la reintegración a la vida civil de más de 48 mil excombatientes y, por tanto, evitar que se reciclen en redes criminales.

Finalmente, por un cuarto carril camina la política de reparación a las víctimas que impulsa la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). La Comisión a mi cargo debe velar por los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Estamos trabajando con alrededor de 3 millones de desplazados y unas 200 mil víctimas de otros crímenes atroces (homicidio, desaparición forzada, masacre, delitos sexuales, reclutamiento de menores, etc.).

Esta estrategia integral está, a mi modo de ver, dando frutos. Han disminuido todos los indicadores de violencia, tales como, el número y la tasa de homicidios, el número de secuestros y masacres.

Papel de la universidad y responsabilidad social empresarial

Pero, aún falta mucho. Para ello, es muy importante contar con Uds. Con los profesionales jóvenes de universidades de excelencia como ICESI, que están produciendo la nueva élite intelectual, profesional y científica del país.

Si la nueva generación de profesionales -que Uds. representan- mira solamente hacia sus intereses particulares y se olvida de los intereses colectivos no vamos a lograr el despegue hacia la nación en paz y en progreso que todos soñamos.

Si la nueva generación de profesionales -que Uds. representan-, se olvidan de esas “grietas geológicas” que todavía subsisten en el suelo nacional (la pobreza, la desigualdad, la violencia), ese divorció entre la nación que podría ser Colombia y la nación que es, no la podremos superar.

Hace muchos años me gradué de bachiller en el Colegio San Juan Berchmans de Cali. Hoy me graduó de nuevo y con inmenso orgullo con Uds.

Felicitaciones. Con ustedes estoy seguro que podemos construir la “nación soñada”.

Muchas gracias.

